

Cancún

Cumbre a medida del capital

Manuel Garí

La Cumbre del Clima de Cancún –la COP 16– aprobó con el voto de 193 delegaciones gubernamentales, sólo se opuso la boliviana, un acuerdo que, en esencia, es la formalización jurídica de la regresiva fórmula barajada un año antes en Copenhague por las delegaciones estadounidense y china. Las decisiones sustantivas se aplazan un año más para la cumbre de Durban en 2011. Se presenta como un gran logro el que los gobiernos van a seguir negociando, por lo que la diplomacia climática internacional se felicita porque el “proceso se ha salvado”.

Teresa Ribera, secretaria de Estado española de Cambio Climático, señala en el activo de la Cumbre que por primera vez aparezcan objetivos de emisiones para China, EE UU y Brasil, obviando la no obligatoriedad de cumplimiento de los mismos. La canciller mejicana Patricia Espinosa, que presidía la reunión, intentó mediante la maza de su cargo de moderadora acallar la disidencia boliviana y mediante el juego de palabras conjugar la coexistencia de dos procesos: Kioto y No Kioto empleando trucos de la caja del mago malo como “*se deben completar los trabajos (...) para evitar una brecha entre...*”

El gran activo real del 16 encuentro de la Convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (UNFCCC, en sus siglas inglesas) ha sido decidir solemnemente no hacer nada. Y, ante la gravedad de la situación, ese acuerdo, no hacer y que siga la orgía de las emisiones, es, con diferencia, el peor de los acuerdos posibles. Esta COP supone una victoria más para el capital y una nueva derrota para los pueblos.

El acuerdo de los necios. Quienes piensan que lo importante es que “se ha salvado el proceso” se engañan, pero no nos engañan. Poco esperaban los satisfechos gobernantes de la COP 16 en lo político, lo que explica su autocomplacencia, pero no estamos ante un juego de esgrima entre cancillerías que se juegan escenarios de influencia o compromisos filantrópicos. Estamos ante una emergencia climática. Y ante la misma, no hay motivos para aplaudir el resultado de Cancún. Se han perdido dos preciosos años por inacción en una cuestión que no admite demora. El riesgo del cambio climático aumenta sin cesar mientras las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) no se reduzcan drásticamente e inmediatamente. La cuenta atrás sigue.

Por ello, podemos calificar el resultado como un nuevo, irresponsable y criminal retraso en la adopción de decisiones y acciones capaces de detener el calentamiento atmosférico. Calentamiento que no se conjura mediante grandilocuentes y vacíos compromisos –exentos de medidas concretas realistas– como los contenidos por el acuerdo suscrito en el que se formula la intención de evitar el aumento de 2° C

en el año 2100. De hecho, los recortes de emisiones previstos por los actuales compromisos voluntarios, de cumplirse, supondrían en 2020 una disminución de un 14% respecto a 1990 a nivel global mundial, muy lejos del intervalo de los porcentajes –entre el 25% y el 40%– planteado por los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC en sus siglas en inglés). O sea, en el mejor de los casos, los compromisos llegarán al 60% de la reducción que el IPCC considera ineludible para limitar el calentamiento.

Son numerosos los científicos del Panel Intergubernamental que señalan como “línea roja climática”, no ya el aumento de los 2 grados respecto a la época anterior a la Revolución Industrial, sino un incremento de 1,5° C. Con los compromisos gubernamentales voluntarios de reducción que los países remitieron a Naciones Unidas tras el fiasco de Copenhague, en 2020 el exceso de emisiones de CO₂ alcanzará una cifra superior a los 10.000 millones de toneladas. Imposible cumplir los buenistas deseos de evitar una subida media planetaria de 2 grados que, en el caso español supondría un aumento de 5° C en verano y la desertificación de la mitad sur de la península.

El acuerdo de los irresponsables. Entre las medidas adoptadas no cabe sólo señalar, como se ha hecho, su insuficiencia cuantitativa, además, hay que destacar que las reducciones no tienen un mismo recorrido ni tampoco un mismo método de verificación. Los países son libres para elegir el año de referencia para medir las emisiones, los porcentajes de reducción y los indicadores de medición. EE UU toma como año de referencia 2005, no 1990 previsto por Kioto. Ello no es menor, pues al tomar como referencia un año más cercano también se toma como referencia un mayor volumen de emisiones, por lo que el objetivo de reducción se fija metas menos ambiciosas desde el punto de vista ecológico. Pero esto se agrava porque Obama se compromete a un raquíto 17% de reducción respecto a 2005, por debajo de los compromisos que en su día hizo Clinton y muy lejos de los porcentajes de la UE. Tampoco es de recibo que China adopte el criterio de reducciones relativas respecto a terceros parámetros, evitando los compromisos en términos absolutos que son los que realmente importan. Pero lo que determina la naturaleza irresponsable del acuerdo es que no habrá un sistema de verificación de los datos transparente y gestionado de forma neutral por la comunidad científica mundial. De manera que las reducciones obtenidas por los países emergentes mediante financiación internacional sí que tendrán supervisión internacional, pero no serán auditadas las reducciones que se declaren obtenidas mediante esfuerzo nacional. Una puerta abierta a la picaresca internacional en nombre de la soberanía nacional.

El acuerdo de los mercaderes. Respecto a la financiación por parte de los países industrializados de la reducción de emisiones en los países empobrecidos, los primeros se han comprometido a realizar una dotación de 30.000 millones de \$ US (22.600 millones de €) hasta 2012, que en años siguientes alcanzará la cifra

de 100.000 millones de \$ US /año, cantidad a todas luces insuficiente para lograr los objetivos enunciados.

Ese Fondo Verde será gestionado por el Banco Mundial, de cuya honorabilidad cabe albergar la desconfianza acumulada por años de políticas antipopulares de la entidad. Pero el problema más inmediato es ¿quién, cómo y para qué se harán las dotaciones? Pregunta pertinente ante los sistemáticos incumplimientos de los compromisos gubernamentales respecto a la dotación de diversos fondos, excluidos los de salvamento de la banca especulativa que ha sido debidamente atendida. Pregunta que se complica cuando se explicita que la financiación pública será limitada al 15% del monto total y que el resto corresponde al capital privado. Se especula con la posibilidad de que la fuente financiera se base en los mercados de CO₂, opción que, aparte de otras consideraciones, resulta ridícula por el monto actual de las transacciones entre los países del Norte y del Sur y la ausencia de indicios en el horizonte de que su evolución sea creciente. Por lo que, probablemente, estemos ante un fondo desfondado y al albur del capital privado.

El programa de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación no es garantía alguna para posibilitar la protección de las masas forestales actuales y mucho menos inducir efectivas políticas de reparación y reforestación sostenible con criterios sociales. Bien al contrario, se perfila como una plataforma de negocio privado de primer orden.

Nuevo escenario, nuevos actores. En los pocos años que separan Kioto de Cancún, el peso económico de los países y su aportación en el total de emisiones de GEI ha variado sustancialmente. Copenhague y ahora Cancún han puesto sobre el tapete, de forma colateral, quién manda en el mundo y quién, como la Unión Europea, atraviesa una crisis política y una pérdida de peso comercial creciente. No es necesario abundar en ello, es evidente. Basta constatar que en la esfera de la diplomacia climática mundial hoy pesan de forma creciente los llamados países emergentes, combinado formado por las incontestadas dictaduras de China, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y por los nuevos actores de la escena neoliberal India, Brasil y México que vienen a sumarse a EE UU, Canadá y Japón.

Los gobiernos de estas últimas potencias ponen como excusa de sus regresivas propuestas la existencia de una oposición interna muy poderosa que no favorece la reducción de emisiones, las nuevas potencias emergentes –algunas de las cuales no celebran elecciones libres– aluden a la necesidad de seguir la senda del crecimiento del PIB para desarrollar su economía, sin poner objeción alguna al modelo productivo en el que se apoya. Unos y otros argumentos son simplemente injustificables. Desde Copenhague, la crisis económica ayudó a dinamitar el viejo discurso climático buenista de los principales países industrializados y, de pronto, pese a la persistencia del volumen de emisiones, gobernantes y medios de comunicación dejaron en un segundo plano la cuestión climática. De nuevo la consigna era crecer a costa de lo que sea.

Nunca se había puesto tan en evidencia el maridaje indisoluble entre un modo de producción, el capitalista, y un modelo de producción, el carbonizado. Cuestión que se puede verificar tanto en las viejas metrópolis industrializadas como en los países emergentes. Todos actúan con los mismos patrones. Tal como van las cosas hay profetas neoliberales que anuncian la apertura de un nuevo nicho de negocio para algunas fracciones del capitalismo que pueden aprovechar la coyuntura, no para invertir en medidas de mitigación del cambio climático ya que su real negocio actual se basa en contaminar y emitir sin tino, sino para situarse mejor en el control de sectores estratégicos como el agua, bien escaso hoy y que más lo será de no parar el calentamiento. Por eso si hasta Copenhague los *lobbies* más activos eran los ambientalistas, esta vez no lo han sido. Se han visto superados por la activa presencia de las compañías.

Ilusos, bobalicones y “consensuadores”. Ante este escenario no faltarán quienes desde las ONG que han venido haciendo trabajo de *lobby* intenten encontrar, como vienen haciendo algunos asistentes cumbre tras cumbre pese a la evidencia de los problemas, el aspecto “positivo” de Cancún. Recurren a la manida metáfora del vaso a medias. El “*proceso se salva*”, “*hemos logrado*” (sic) *incorporar a EE UU y China (resic)*”, repiten como papagayos. Si bien es cierto que reconocen (¡vaya lumbreras!) que Cancún no salvó el clima. Ese vaso medio lleno, hoy lo está de hiel: ya no estamos ni siquiera en el Bali de 2007. De los ambientalistas *lobbistas* no se podía esperar otra cosa. Su hábitat natural son esos foros en los que juegan el elitista rol de “conciencia crítica”. Sus preocupaciones y desvelos están bien alejados de los avatares del movimiento social. Son alguien en la medida en que hay poderosos y todavía no se han alzado las gentes.

Del lado de los gobiernos que en Copenhague mostraron dignidad, el balance no puede ser peor. Pablo Solón jefe de la delegación de Bolivia en la Cumbre, no contó con el apoyo de los países del ALBA. Los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua prefirieron consensuar con el imperio (EE UU) y con los nuevos emperadores orientales. La diplomática venezolana Claudia Salerno se significó por su empeño en no “salirse” de la foto. Esta actitud dinamitó el mensaje de La Conferencia de los pueblos realizada en Cochabamba.

El documento final de la presidencia de la Cumbre omitió las referencias a la Justicia Climática, presente en los borradores que los países tuvieron presentes en los meses anteriores a la COP 16. Los planteamientos bolivianos al respecto fueron ninguneados durante toda la Cumbre, no se trataron en el plenario y solamente estuvieron presentes de forma marginal en el Grupo de trabajo sobre el Protocolo de Kioto, en el Grupo de trabajo sobre la Cooperación y en la reunión de la Conferencia de las Partes (COP) y la Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP).

Síntesis del vacío. No se establece 1,5° C como aumento de temperatura máximo. No se fijan unos compromisos de reducción de emisiones de los países

industrializados acordes con las exigencias del IPCC. Los mecanismos de financiación previstos pesarán como una nueva losa sobre los países empobrecidos, pues, tal como se perfilan, generaran nueva deuda externa a través del pago de los intereses. Quedan muchos aspectos relevantes sin definición y podemos decir que si no hay un milagro, no conoceremos un segundo periodo de compromisos con la filosofía del Protocolo de Kioto. Los países industrializados más importantes y los emergentes siguen sin asumir sus responsabilidades. Intentan distraer la atención sobre sus responsabilidades e intentan repartir las cargas. En este contexto, conviene no perder el rumbo y tener presente la metáfora del científico de Nueva Delhi Anil Agarwal, cuando calificaba de emisión necesaria para la supervivencia la del metano de una vaca de un campesino de Bangladesh, y de lujo ofensivo la del anhídrido carbónico del coche de un magnate de Park Avenue.

E pur... podemos reaccionar, actuar y ganar. Para remontar una mala situación, lo primero es identificarla, analizarla y buscar medidas. Esto no es tarea ni menor ni de unos pocos. Ni cuestión resoluble en un artículo. Es una cuestión vital, no para el clima, sino para las gentes. Nuestra gente. Y, por tanto, para el movimiento social.

La Asamblea Europea por la Justicia Climática (AEJC) ha diseñado una hoja de ruta en la que podemos reconocernos plenamente. Propugna en primer lugar la implementación de reducciones drásticas de las emisiones mediante un acuerdo global y vinculante que deberá plasmarse en planes en cada país. Y en segundo lugar defiende que las reducciones se hagan localmente sin transferir emisiones mediante mecanismos de mercado, como es el caso de la compra venta de derechos de emisión Norte/Sur u otros.

En ese sentido cabe señalar que en el Estado español podemos avanzar en amplios acuerdos sociales sobre dos grupos de temas. La primera cuestión sobre la que, seguramente, habrá un amplio acuerdo en el movimiento social contra el cambio climático, es situar como prioridad la necesidad de descarbonizar el modelo energético de forma inmediata mediante la introducción masiva de las energías renovables e iniciar un giro en el modelo de movilidad y transporte de personas y mercancías. Y también habrá acuerdo en que la cuestión energética no termina en las fuentes, debe estar guiada por el criterio del ahorro y usada a través de tecnologías eficientes.

El cambio de modelo energético no sólo es clave en la lucha contra el calentamiento, es el vector decisivo para un cambio de modelo productivo que, en el conjunto del proceso de uso de recursos, fabricación de bienes y servicios, y generación de residuos, es, además de económicamente ineficiente, ambientalmente insostenible. Ello puede formar parte de un posible segundo núcleo de acuerdos más amplio que apunta una serie de objetivos intermedios y reivindicaciones transitorias de sumo interés.

A su vez, la AEJC, plantea que las medidas ecológicas deben estar indisolublemente ligadas a la justicia social. Justicia climática y social son las caras de una misma moneda, por ello cabe señalar que conceptos como el “transición justa” en

el cambio de modelo productivo que se abren paso en el sindicalismo internacional, son elementos básicos no sólo para hacer bien las cosas en el plano de los procesos productivos, sino también para poder forjar una amplia mayoría social en los países industrializados favorable al cambio. En el plano internacional la justicia exige el reconocimiento y satisfacción de la deuda económica y ecológica contraída por los países industrializados con los empobrecidos. Por ello, la mayoría social del “Norte” deberá ser solidaria con las poblaciones y comunidades de los países del “Sur” y respetuosa de sus derechos y soberanía.

La nueva alianza anticapitalista. Se habla de crisis ecológica, de crisis climática, cuando debería decirse que la verdadera crisis radica en la relación entre la sociedad y la naturaleza. Crisis no casual ni inevitable, pues es producto del insostenible modelo económico. Por ello, no cabe pensar en soluciones basadas en reformas verdes del capitalismo real. Hoy lo que se puede esperar bajo el poder del capital, como señaló Manuel Sacristán, es el avance de la barbarie, en tanto que degradación general de la vida de la especie. Lo que la actual crisis social, ecológica y económica ha puesto en evidencia es la contradicción entre un modelo productivo depredador de los recursos y basado en la quema de fósiles –asociado a un modo de producción basado en la explotación– por un lado y, por otro, la supervivencia misma de la humanidad.

Las dos lógicas hoy enfrentadas son la de la dictadura de los mercados, cuyo objetivo es maximizar la ganancia privada, y la de los intereses y necesidades de la mayoría social. Lo que está en peligro no es el clima, es nuestro futuro si no detenemos el cambio climático. Pero, esto que es evidente, todavía no forma parte de la conciencia de la mayoría social. Es necesario empezar por cambiar el inmovilismo y conformismo de la mayor parte de la población, mera espectadora de las comedias institucionales.

Lo expuesto exige plantearnos la necesidad de construir una amplia coalición social de organizaciones ancladas en el trabajo de base, cotidiano, que aúne esfuerzos y reivindicaciones, que trencen nuevas alternativas populares. En esta tarea, últimamente, no todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales y ecologistas han puesto todo el empeño requerido. Ya no es el momento del trabajo basado principalmente en la presión sobre los poderosos y en el impacto mediático de minorías activistas. Hoy es preciso detectar, organizar y enlazar las resistencias de los pueblos y, por tanto, vincular las acciones simbólicas y minoritarias con la movilización social. Hoy es preciso volver a identificar nuestros aliados en cada país y en el ámbito internacional.

Así iremos construyendo las bases de un programa contra el cambio climático basado en criterios de sostenibilidad ambiental y justicia social. Un programa de reivindicaciones transitorias para la acción que, a partir de la experiencia en la lucha, llevarán a más y más gentes a posiciones anticapitalistas.

Manuel Garí es miembro de la Redacción de *VIENTO SUR*.